



# Expandir el potencial de la alianza UE-ALC: enfoques integrados para la transición verde justa en América Latina y el Caribe

**Rita da Costa**

Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

rita.dacosta[@]oecd.org

**Adriana Caicedo**

Centro de Desarrollo de la OCDE

adriana.caicedo[@]oecd.org

## Resumen

Las economías latinoamericanas afrontan el desafío de la transición verde justa al enfrentarse a la necesidad de convertir sus industrias más rentables en industrias descarbonizadas, sin caer en una *reprimarización*. América Latina y el Caribe (ALC) requiere alianzas estratégicas, como la alianza UE-ALC, que impulse una transición verde y justa exitosa, ayudando a mitigar los efectos negativos que esta transición pueda tener en el corto plazo, y maximizando el potencial de ALC para hacer de esta transición el eje para la transformación de los modelos de desarrollo de la región. En respuesta a los desafíos interconectados de la crisis climática, el contexto geopolítico actual y los retos económicos, la UE ha lanzado diversas herramientas para promover una transición verde justa. La UE busca fortalecer su cooperación internacional, especialmente en temas relacionados con la transición verde y las economías circulares, descarbonizadas y justas, con socios que compartan objetivos comunes. Este artículo destaca la necesidad de que esta alianza birregional tenga un enfoque integrado que acompañe el potencial de las inversiones, con acciones que favorezcan cambios en las políticas públicas y capacidades de los gobiernos de la región. En concreto propone cuatro claves fundamentales para esta alianza renovada: inversiones para transformar las industrias existentes y promover sectores verdes estratégicos, desarrollo de capacidades a nivel nacional y diálogo político; coherencia de políticas y alineación de estándares, y, finalmente, apoyo multilateral.

## Palabras clave

Transición verde, alianzas internacionales, desarrollo, cooperación, América Latina, Unión Europea.

## Abstract

Latin American economies face the challenge of a just green transition by facing the need to convert their most profitable industries into decarbonized industries, without falling into reprimarization. Latin America and the Caribbean (LAC) requires strategic partnerships, such as the EU-LAC partnership, that promote a successful green and just transition, helping to mitigate the negative effects that this transition may have in the short term, and maximizing LAC's potential to make this transition the axis for the transformation of development models in the region. In response to the interconnected challenges of the climate crisis, the current geopolitical context and economic challenges, the EU has launched various tools to promote a just green transition. The EU seeks to strengthen its international co-operation, especially on issues related to the green transition and circular, decarbonised and fair economies, with partners who share common objectives. This article highlights the need for this bi-regional alliance to have an integrated approach that accompanies the potential of investments, with actions that favor changes in public policies and capacities of the governments of the region. Specifically, it proposes four fundamental keys for this renewed partnership: investments to transform existing industries and promote strategic green sectors, development of capacities at the national level and political dialogue; policy coherence and alignment of standards, and finally, multilateral support.

## Keywords

Green transition, international alliances, development, cooperation, Latin America, European Union.

## Rita da Costa

Consejera y jefa de unidad en el Centro de Desarrollo de la OCDE, su trabajo se enfoca en el desarrollo económico, la transformación de la cooperación internacional, y los procesos globales, como el G20. Se incorporó a la OCDE en 2007 y desde entonces ha ocupado varios cargos. Fue Asesora Política y dirigió la Oficina del director, donde contribuyó a definir e implementar una nueva narrativa para la Estrategia de Desarrollo de la OCDE. Anteriormente, trabajó como analista de políticas en la Unidad de América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse a la OCDE, trabajó para la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra y para el Centro de Comercio Internacional de UN (ITC). Es máster en Comercio Internacional por la Universidad París I, Panteón Sorbona, y en Gestión de Negocios Internacionales (CECO), y tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Salamanca y KU Leuven (Bélgica).

## Adriana Caicedo

Economista con Máster en Políticas Públicas de Sciences Po (París). Actualmente es Analista de Políticas Públicas en el Centro de Desarrollo de la OCDE, donde se ha dedicado a estudiar asuntos de desarrollo económico y cooperación internacional, particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Con experiencia de más de cinco años en organismos internacionales, también trabajó en el sector público en Colombia y ha sido docente en materia de desarrollo internacional.

## 1. Introducción

En el contexto de América Latina y el Caribe (ALC), la transición verde justa se presenta como una respuesta a los desafíos interconectados de la crisis climática, la erosión del sistema multilateral y los choques económicos transnacionales.

La Unión Europea (UE) ha lanzado diversas iniciativas, como el Pacto Verde, para promover una transición verde justa y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Estas iniciativas buscan planificar el cumplimiento de metas de reducción de emisiones y restablecer el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la narrativa de la transición verde justa debe ser adaptada a las necesidades de los países en desarrollo, incluidos los de ALC. Estos países enfrentan el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental sin perder de vista los retos socioeconómicos aún presentes en la región.

Además, surge la pregunta de cómo apoyar a los países emergentes para forjar un nuevo modelo de desarrollo centrado en el bienestar y el crecimiento desvinculado de la explotación de recursos naturales. En este contexto, se plantea la importancia de una asociación entre ALC y la UE para abordar los retos de la transición verde justa. ALC ha dado pasos importantes hacia la sustentabilidad, con importantes avances en materia de energías renovables. Además, los avances legales en la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en la región destacan su contribución al diseño de la transición verde justa.

Una alianza estratégica entre la UE y ALC puede reunir la experiencia de ambas regiones en conservación, desarrollo económico y bienestar social, y abordar los desafíos de manera mutuamente beneficiosa. Los latinoamericanos muestran un claro apoyo a la ampliación de la cooperación entre la UE y ALC, identificando áreas clave como la financiación sostenible para el desarrollo y la cooperación técnica. Esta asociación puede fortalecer los objetivos de la UE y ALC en términos de productividad laboral, justicia socioeconómica y financiamiento del crecimiento inclusivo, y ofrecer beneficios para ambas regiones.

## 2. Contexto: ¿qué significa una transición verde en el contexto de ALC?

En respuesta a los retos interconectados de la crisis climática, erosión del sistema multilateral y choques económicos transnacionales, la UE ha lanzado varias herramientas para promover la transición verde justa como un aspecto clave para afrontar las crisis interconectadas, entre ellos el Pacto Verde. Este pacto se presenta como el compromiso y como la hoja de ruta de la UE para cumplir con la meta de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, además de ofrecer nuevas oportunidades para la cooperación internacional dedicada a asegurar que la transición verde sea justa y equitativa.

Estas iniciativas sirven un doble propósito para la UE: primero, abrir un espacio político para planificar cómo la Unión logrará sus metas según las convenciones multilaterales para la reducción de emisiones

y, segundo, brindar la oportunidad para que la UE reestablezca su liderazgo en el sistema multilateral a través de su posición estratégica como socio en la lucha para combatir el cambio climático.

Para alcanzar la segunda meta, la UE busca extender su cooperación internacional con un enfoque especial en los temas de la transición verde y de economías circulares, descarbonizadas y justas. Por ejemplo, la UE se ha comprometido a dedicar el 40% de la ayuda al desarrollo a proyectos que trabajen para cumplir los objetivos climáticos y, como parte de ello, se han ampliado los proyectos EURO-CLIMA+ para seguir abordando la biodiversidad, la eficiencia energética, la sostenibilidad urbana y la resiliencia en los sistemas alimentarios y la gestión del riesgo de catástrofes (Sanahuja, 2021). Esta iniciativa reúne a varios Estados miembros, fondos de la UE y agencias de la ONU para convocar diálogos políticos y garantizar la coherencia tanto dentro de los gobiernos como entre las instituciones nacionales e internacionales.

La transición energética está brindando una nueva narrativa para los países al promover mayor unidad y la oportunidad de construir un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo sostenible. Mientras que anteriormente el discurso ambiental se centraba en la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, en los últimos años, ha habido un cambio significativo, primero hacia la idea del crecimiento verde (Bowen y Fankhauser, 2011) y posteriormente hacia la idea de una transición verde, haciendo referencia a una transformación fundamental de los sistemas energéticos hacia fuentes de energía limpia y sostenible (Terzi, 2020).

Este cambio de enfoque ha llevado a una reevaluación de las políticas energéticas y económicas de muchos países, incluidos Estados Unidos y China. Ambos han reconocido la importancia de abordar los desafíos ambientales y han establecido acuerdos verdes para impulsar la transición hacia una economía baja en carbono. En Estados Unidos, el Acuerdo Verde, también conocido como Green New Deal, es un plan integral que busca abordar tanto la crisis climática como las desigualdades sociales y económicas. Este acuerdo propone inversiones significativas en energías renovables, eficiencia energética y transporte sostenible, con el objetivo de crear empleos verdes y promover un desarrollo equitativo y sostenible (Galvin y Healy, 2020). Por su parte, China está invirtiendo fuertemente en tecnologías limpias, como la energía solar y la eólica, y ha establecido metas ambiciosas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas, alcanzar la neutralidad del carbono en 2060 (IEA, 2021).

Sin embargo, la narrativa de la transición verde justa a menudo sigue entendiéndose como una visión basada en las experiencias históricas de los países desarrollados. La transición verde se enfoca en el potencial y necesidad de transformar las industrias que ya existen en versiones más ecológicas aprovechando los avances en tecnologías verdes y energías renovables, además de proponer una reducción del consumo individual, y modificar los hábitos de consumo y producción de los países más desarrollados. No obstante, esta visión, en ocasiones, podría no reflejar la realidad de muchos países en vías de desarrollo, especialmente los que buscarían utilizar sus recursos no renovables para promover su industrialización y desarrollo tecnológico. Existe también temor por parte de estos países a no crecer lo suficiente al adoptar modelos de crecimiento basados en una transición verde y poner en riesgo el progreso a expensas de la sostenibilidad ambiental (Monsalves, 2022).

Recientemente, la cuestión de cómo deben o no evitarse los combustibles fósiles surgió de nuevo en los debates multilaterales tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, catalizando nuevas conversaciones sobre las cadenas de suministro de energía, y el riesgo de priorizar las necesidades y experiencias de países desarrollados sobre los que todavía no han explotado sus reservas de recursos naturales. Cortes de energía por proveedores rusos provocaron una crisis energética inesperada para

los ciudadanos de la Unión Europea obligando a sus países miembros a mirar al sur y llegar a nuevos acuerdos, por ejemplo, con países africanos, para obtener gas en el corto plazo (Browning, Bousso y Roelf, 2022; Escribano y Urbasos Arbeola, 2023). Aunque algunas voces del continente han declarado que el aumento del interés europeo en el gas africano y sus consecuentes beneficios económicos podrían servir a mercados locales y catalizar inversión, otras han destacado la existencia de asimetrías en estas nuevas cadenas de suministro (Gbadamosi, 2022).

Esa disonancia destaca uno de los retos más persistentes de las transiciones verdes y socioeconómicas: ¿cómo deben avanzar los países en desarrollo sin aumentar la contaminación medioambiental para lograr la prosperidad? Además, ¿cómo se puede apoyar a los países emergentes a forjar un nuevo modelo de desarrollo que centre el bienestar y el crecimiento sin basarse en la explotación de recursos naturales con baja productividad? Y, por último, ¿cuál es el papel de la transición verde para garantizar la autonomía estratégica y energética tanto latinoamericana como de sus países socios?

Preguntas como estas plantean retos para los países en desarrollo, por ejemplo, los de América Latina y el Caribe. Las industrias de la región han enfrentado dificultades en aumentar su productividad y eficiencia, resultando en una concentración excesiva de algunas economías en sectores primarios como la extracción de recursos naturales y minerales. La proporción de PIB derivada de la exportación de recursos primarios se ha incrementado desde los años noventa y aunque la participación de las exportaciones primarias bajó entre 1990 y 2008, se han mantenido al mismo nivel durante los últimos diez años, y actualmente cuenta con casi el 60% de todas las exportaciones (CEPAL, 2022). Este patrón presiona a los recursos naturales no renovables y contribuye a solidificar una configuración económica dependiente del consumo externo y la explotación insustentable del medio ambiente (CEPAL, 2022).

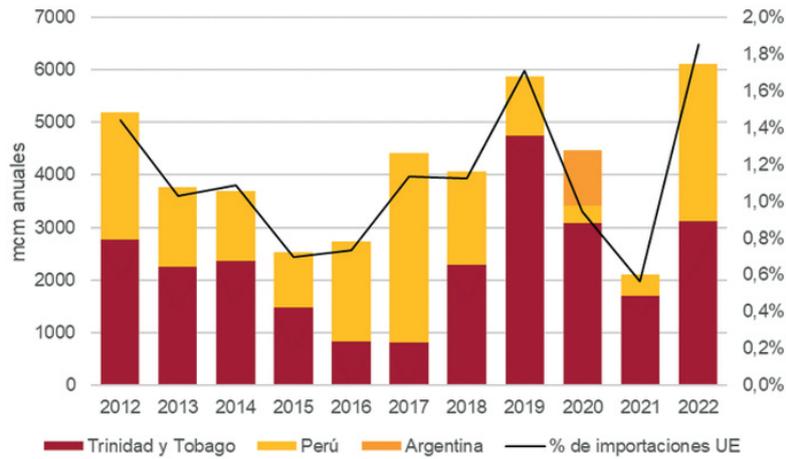
Parcialmente, como resultado de esta estructura, la productividad laboral de ALC ha declinado relativo a otras regiones, a pesar del crecimiento económico de las últimas décadas. Específicamente, mientras que la productividad laboral de ALC era el 75% de la de la Unión Europea en 1970, ha bajado a 40% en 2019, fenómeno destacado como la trampa de la productividad de la región (OCDE *et al.*, 2020). La baja productividad también es paralela a las economías menos diversificadas y que carecen de la capacidad técnica para desarrollar las tecnologías que serán necesarias para transformar las industrias existentes en su alternativa descarbonizada.

Es en este contexto que las economías latinoamericanas enfrentan los retos de convertir las industrias más rentables en industrias descarbonizadas. Por ejemplo, en los casos de Chile y Ecuador, las llamadas “industrias ocaso” o industrias que dependen de los combustibles fósiles, constituyen el 5% de los ingresos totales y el 4% del empleo (Magacho, Godin, Hémar y Mansart, 2022). A medida que estas industrias pierden cuota de mercado, muchas veces debido al endurecimiento de las normas de importación, los países pueden verse en la necesidad de tener que aumentar el gasto para modernizar las industrias y, al mismo tiempo, hacer frente a la disminución de los ingresos procedentes de los sectores económicos tradicionales.

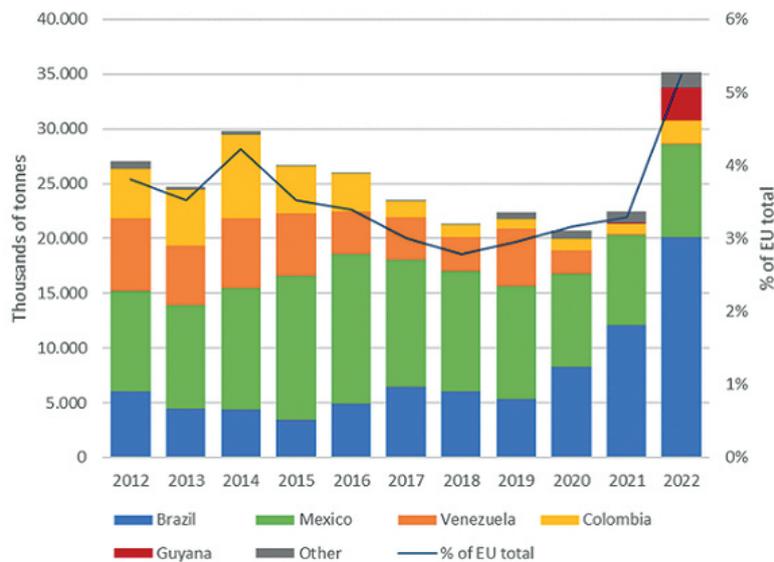
Dado el actual contexto geopolítico, la concentración de recursos necesarios para la transición energética en ALC podría llevar a una “reprimarización” perjudicial para la región, es decir, la intensificación de la dependencia de las industrias extractivas con baja productividad. Los desafíos actuales enfrentados por la UE se han reflejado en un incremento importante de la demanda de gas y crudo a la región de ALC entre 2021 y 2022 (Figura 1). Esta tendencia, de mantenerse, implicaría una dependencia económica de recursos naturales a menudo acompañados de degradación ambiental, así como de una falta de diversificación económica.

**FIGURA 1. Importaciones europeas de gas y crudo provenientes de América Latina**

**Panel A. Importaciones europeas de gas (millones de m<sup>3</sup> y % del total)**



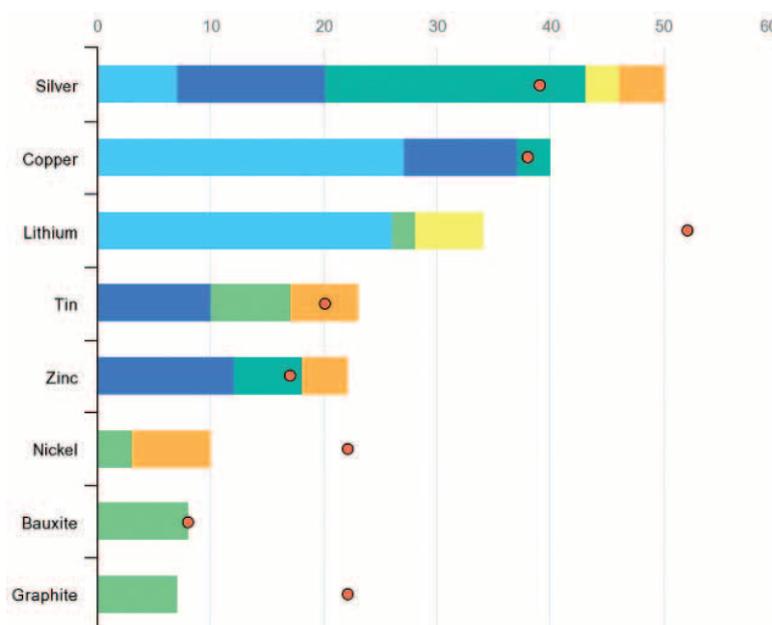
**Panel B. Importaciones europeas de crudo (% del total, 2012-2020)**



Fuente: Escribano y Urbasos Arbeola, 2023.

Por otra parte, América Latina es un productor consolidado de varios minerales esenciales para las tecnologías de energía limpia, y podría aprovechar su bien establecido sector minero para diversificarse hacia nuevos minerales, y ayudar a la economía mundial a evitar las carencias y los cuellos de botella que podrían amenazar las transiciones hacia la energía limpia. La región ya produce grandes cantidades de litio —necesario para las baterías— y cobre, y sustenta la expansión de las energías renovables y las redes eléctricas (Figura 2). Pero podría expandirse hacia otros materiales, como los elementos de tierras raras, necesarios para los motores de los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas, y el níquel, componente clave de las baterías (IEA, 2023). Es fundamental que ALC busque una transición energética equilibrada y que más allá de las industrias extractivas, en las que puede posicionarse para captar una proporción mayor del valor añadido en la cadena de producción, promueva la diversificación de su economía hacia nuevos sectores para evitar los riesgos de una reprimarización, y que al tiempo se fomente un desarrollo sostenible y resiliente.

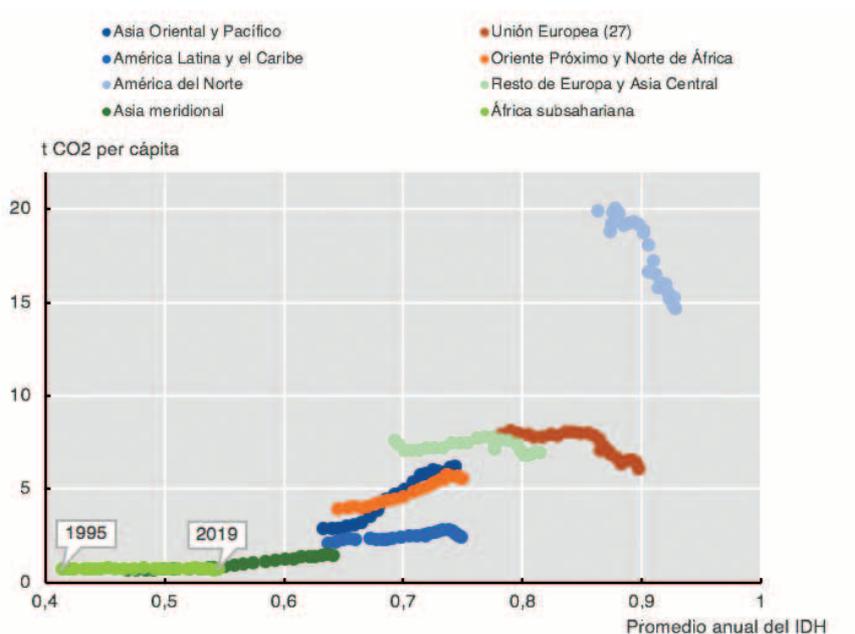
**FIGURA 2. Participación de América Latina en la producción y reservas de minerales seleccionados, 2021**



Fuente: IEA, 2023.

A pesar de esto, se ha visto que sí es posible lograr mayor bienestar y desarrollo humano manteniendo niveles bajos de contaminación. Los países de ALC pueden desempeñar un papel fundamental en la agenda global compartiendo experiencias de desarrollo sostenible con otras regiones de similar o menor nivel de desarrollo, dado que la región ha mejorado notablemente su índice de desarrollo humano en los últimos años, al tiempo que ha mantenido bajas emisiones de CO<sub>2</sub> (Figura 3).

**FIGURA 3. Emisiones de CO<sub>2</sub> per cápita en relación con el IDH: Serie de tiempo 1995-2019**



Fuente: OCDE *et al.*, 2022.

Para responder a esos retos y construir estructuras que permiten alcanzar economías más inclusivas y resilientes, que progresan al tiempo que reducen sus emisiones de CO<sub>2</sub>, es fundamental establecer alianzas que favorezcan realizar una transición verde adaptada a las necesidades específicas de ALC.

### **3. Alianzas para la transición verde: ¿por qué es importante una alianza ALC-UE?**

Para empezar, cabe destacar que ALC ha dado pasos importantes para convertirse en un continente verde y sustentable. Primero, varios países derivan más de la mitad de su energía de fuentes renovables, y la matriz de energía ha incrementado su capacidad renovable un 33% de 2015 a 2020 (Yepez, 2022) y, por tanto, la región cuenta con un gran potencial en energía renovable (OCDE *et al.*, 2022). Ahora bien, el uso de energía renovable constituye el 29% del suministro primario de energía de toda ALC (Malmierca, Quiroz y Leonard, 2022) pero con mucha variación entre países: el 99% de energía en Costa Rica y el 83% en Brasil vienen de fuentes renovables comparado con países que siguen incrementando su uso, como en Argentina, donde el uso de energía renovable ha subido a 12% en 2022, comparado con solo el 2% hace diez años (Scriven, 2022). Países de la región también se consolidan como carbono negativo, como es el caso de Panamá, uno de los tres países del mundo en los que los bosques capturan más carbono que el total de emisiones de gases (*La Prensa Latina*, 2021).

Adicionalmente, más allá de las medidas sustentables respecto a la energía, algunos gobiernos de la región han adoptado conceptos como el *buen vivir* y su uso en ALC como un modelo alternativo a la visión del desarrollo atado al crecimiento económico. Este concepto establece un paradigma de desarrollo que prioriza la armonía entre las sociedades humanas, el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Aunque el concepto nació en Suramérica —en concreto, Ecuador se convirtió en el primer país que lo consagra en su Constitución en 2009—, la noción también ha llegado a discursos políticos en Europa y a los acuerdos entre las dos regiones, como ilustra su inclusión en la Declaración de Santiago entre la UE y CELAC en 2013 (Hernández y Laats, 2020).

Más recientemente, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, ha representado también un hito histórico no solo para la región de América Latina y el Caribe, sino también para el mundo. Este es el primer tratado que crea un régimen de protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, una cuestión clave de llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos (CEPAL, 2021). Este acuerdo es de especial relevancia para una región en la que en el año 2020 sucedieron los tres cuartos de los asesinatos a nivel mundial (330) de defensores de los derechos humanos, el medioambiente y la tierra. Solo en Colombia se registraron 177 asesinatos, más de la mitad a nivel mundial (Fernández y Macía, 2022).

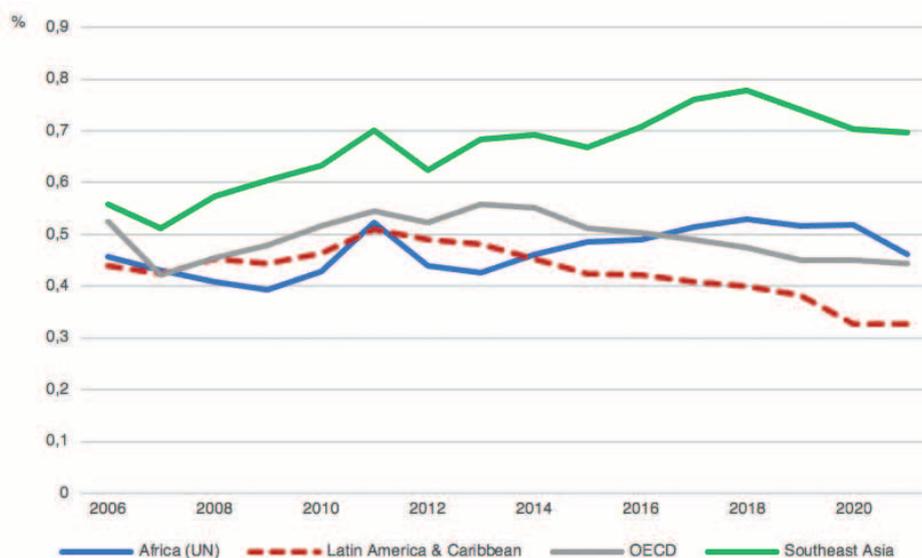
Los avances legales de ALC a favor de la protección del medio ambiente y su creciente influencia en los debates europeos sobre economías verdes subrayan el impacto que ALC puede tener en el diseño del camino de la transición verde. Del mismo modo, la historia de la vinculación del bienestar con la armonía ecológica recalca que la transición verde no es un plan económico promulgado por gobiernos extranjeros, sino un proyecto arraigado en las tradiciones y sociedades diversas del continente. Por esta y otras razones, la alianza entre la UE y ALC fomenta una relación entre países con visiones compartidas, además de establecer una relación mutuamente beneficiosa que reúne la experiencia de ambas regiones en conservación, desarrollo económico y énfasis en el bienestar social.

La posibilidad de reenfoque una alianza estratégica entre las dos regiones cuenta con el apoyo de los países latinoamericanos. En una encuesta a funcionarios públicos de estos países, más de la mitad de los encuestados piensan que se deben ampliar tanto los sectores de la cooperación como los temas específicos en la renovación de la alianza entre la UE y ALC. En concreto, los encuestados identificaron la financiación sostenible para el desarrollo, cooperación para hacer frente a las trampas de desarrollo, y la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades como las tres áreas principales para profundizar la relación entre la UE y ALC (OCDE, en preparación).

Estas prioridades coinciden con los objetivos de la UE en las intersecciones entre productividad laboral, justicia socioeconómica y financiación del crecimiento económico ecológico, y refuerzan el beneficio que ofrece considerar la UE como posible modelo y socio. Este punto ha sido igualmente subrayado por los ciudadanos de ALC, quienes consideran a la UE el líder mundial en protección del medio ambiente (59%), muy por delante de Estados Unidos (12%) y de China (9%) (NUSO, 2021), lo cual ilustraría la voluntad de una cooperación más fuerte entre regiones.

La agenda medioambiental y la protección de la biodiversidad están entre las prioridades de los ciudadanos en ALC. Los ciudadanos latinoamericanos muestran estar relativamente más preocupados por la gravedad del cambio climático que en otras regiones del mundo: en promedio, el 68% de los ciudadanos de ALC reconoce que el cambio climático es una amenaza muy grave para su país en los próximos veinte años (OCDE *et al.*, 2022). En paralelo a esta preocupación, se evidencia una caída en la satisfacción ciudadana con las políticas para preservar el medio ambiente: esta ha disminuido desde 2010 y se encuentra entre los más bajos comparados con países de la Unión Africana, el Sudeste Asiático y países de la OCDE (Figura 4).

**FIGURA 4. Nivel de satisfacción con los esfuerzos para preservar el medio ambiente**



Nota: Respuestas como “satisfactorio” a la pregunta “¿Cómo de satisfecho está de los esfuerzos de su país para preservar el medio ambiente?”, de la Encuesta Mundial de Gallup.

Fuente: Elaboración propia basada en Gallup, 2023.

Además de ser prioridad para los gobiernos de ALC y sus ciudadanos, la agenda medioambiental es una oportunidad para que la región avance en transformar su contrato social. La transición verde justa ofrece a ALC la posibilidad de avanzar hacia un nuevo contrato social a través de oportunidades para

una transformación productiva sostenible, aprovechando de manera estratégica muchos de sus activos naturales, por ejemplo, el litio u otros minerales (Calvo, 2019). Como se ha mencionado en la sección anterior, la región cuenta con una abundancia de recursos naturales estratégicos que son fundamentales en la transición hacia una economía verde: ALC albergaba el 61% de las reservas mundiales de litio, el 39% de las de cobre y el 32% de las de níquel y plata. En el caso del litio, utilizado en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, ALC posee importantes yacimientos, lo que le otorga una ventaja competitiva en la producción y exportación de este mineral clave en la transición energética. La explotación sostenible de estos activos naturales no solo puede generar ingresos y empleo, sino también impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo de cadenas de valor verdes en la región. Aprovechando estos recursos de manera responsable y equitativa, ALC puede promover un desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente, genere beneficios económicos y sociales, y sienta las bases para un contrato social más equitativo (OCDE *et al.*, 2022).

El potencial de la transición verde para avanzar hacia un nuevo contrato social no será factible si la región no tiene en cuenta la necesidad de buscar formas de generar beneficios tangibles para las comunidades locales. El sector minero tiene un gran potencial de desarrollo, pero al mismo tiempo va acompañado de un alto riesgo de degradación medioambiental y de repercusiones negativas en las comunidades locales. En América Latina, los proyectos mineros pueden enfrentarse a una oposición especialmente fuerte por parte de las comunidades locales. Según una base de datos mundial sobre conflictos mineros, el 45% de los conflictos registrados se localizan en América Latina, donde las actividades suelen situarse cerca de ecosistemas sensibles y biodiversos, muchos de los cuales albergan comunidades vulnerables (IEA, 2023).

Más allá de esto, el costo de la inacción es grande para América Latina y el Caribe. A pesar de sus bajas emisiones, la región ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático: el número promedio de eventos meteorológicos extremos relacionados con el clima en ALC aumentó en la mayoría de los países entre 2001 y 2022, en comparación con las dos décadas anteriores (OCDE *et al.*, 2022). Además, ALC es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, dado que 13 de los 50 países identificados como más afectados por la emergencia climática están ahí (Germanwatch, 2021).

Estas prioridades, tanto para los gobiernos como para ciudadanos de América Latina y el Caribe, coinciden con aquellas de la Unión Europea. En efecto, la transición verde es una de las prioridades de la UE. Además de ser uno de los pilares de la agenda actual europea (Comisión Europea, 2019), la adopción del Pacto Verde Europeo puso de manifiesto que la política climática está firmemente integrada en la estrategia de crecimiento de la UE. Este pacto tiene el objetivo de transformar las cadenas de valor, reducir la huella ambiental de los sistemas alimentarios e introducir estándares especiales para producción y consumo.

Para lograr su meta de desvincular el crecimiento económico del uso de recursos naturales, países de ALC pueden aprovechar el liderazgo de la UE y su éxito en avanzar el bienestar sin incrementar su impacto medioambiental. Como se ha mencionado, de las regiones con altos niveles de desarrollo humano, la UE tiene uno de los niveles más bajos de emisiones de carbono per cápita, demostrando que es posible desvincular el bienestar de las emisiones de CO<sub>2</sub> (OCDE *et al.*, 2022). Estos resultados se deben a una variedad de políticas y, por tanto, sus experiencias en áreas tan diversas como la economía circular, la planificación urbana o las redes energéticas ofrecen oportunidades prometedoras para la transferencia de conocimientos y tecnología con los socios latinoamericanos.

## 4. Hacia un enfoque integrado: cuatro claves para la transición verde justa en ALC

El camino hacia la transición verde justa en ALC no es fácil. La Unión Europea en particular puede ser un socio clave en apoyo de esta transición. Para la construcción de esta alianza será clave, como se ha mencionado anteriormente, un mejor entendimiento de lo que significa la transición verde para la región, de sus beneficios potenciales y sus costes. Plantear una narrativa común que ponga esta transición verde justa en el centro de una transformación de los modelos de desarrollo de la región que permita la salida de esta de las trampas del desarrollo (OCDE, 2019) será fundamental también para poder aprovechar esta transición en el avance hacia un contrato social en América Latina y el Caribe.

Para poder tener un resultado transformador del modelo de desarrollo de la región y superar las trampas, esta alianza emplea un enfoque comprehensivo que integre diferentes herramientas y actores, como se ha anotado en el enfoque de *Desarrollo en Transición* (Da Costa, 2021). Por ejemplo, las inversiones deben ir acompañadas de alianzas ligadas a apoyo a las políticas públicas en los países de la región, en particular de diálogos de políticas públicas que permitan desarrollar sectores con alto potencial y mitigar los costes de esta transición tanto en el mercado laboral como en la pérdida de ingresos públicos. Se debe también tener en cuenta —y mitigar— los efectos de las políticas verdes de la UE en la región, además de potenciar las herramientas a nivel regional y multilateral que favorezcan una transición verde justa beneficiosa para América Latina y el Caribe. Solo así se podrá lograr una transformación productiva sostenible, a través de una transición verde justa.

Un enfoque integrado debería centrarse en al menos cuatro claves para la transición verde: inversiones, movilización de finanzas y diálogo de políticas públicas; coherencia y capacidades a nivel nacional; diálogo de políticas y, por último, apoyo multilateral.

### 4.1. Inversiones y diálogo para transformar las industrias ya establecidas e impulsar sectores verdes estratégicos

Si bien la transición verde presenta una serie de oportunidades para el crecimiento de mercados inexplorados y el aumento de oportunidades para un crecimiento inclusivo y sostenible, no está exenta de desafíos. Principalmente, los gobiernos de ALC deben estar preparados, no solo para hacer frente a las pérdidas de ingresos que representa en lo inmediato la reducción de la relevancia de los sectores o industrias extractivas en su economía, sino también establecer políticas que les permitan apoyar a los trabajadores a medida que se reciclan y cambian de sector. Los socios de ALC, como la UE, así como el sector privado, desempeñan un papel importante en esta transformación, para proveer tanto las inversiones necesarias, como para acompañarlas con el diálogo de políticas públicas y reformas adecuadas para que esas inversiones sean sostenibles y lleguen a una mayor parte de las sociedades latinoamericanas.

#### El potencial para la atracción de inversiones

Principalmente, serán necesarias inversiones en sectores e industrias con gran potencial para fomentar la creación de empleos verdes. Sectores como la agricultura y la ganadería sostenible, el transporte, la bioeconomía y sistemas alimentarios regenerativos, el turismo y la minería sostenibles, la gestión de agua y residuos, y las energías renovables son considerados sectores “verdes” con la posibilidad de impulsar una creación importante de empleos en el marco de la transición (OCDE *et al.*, 2022).

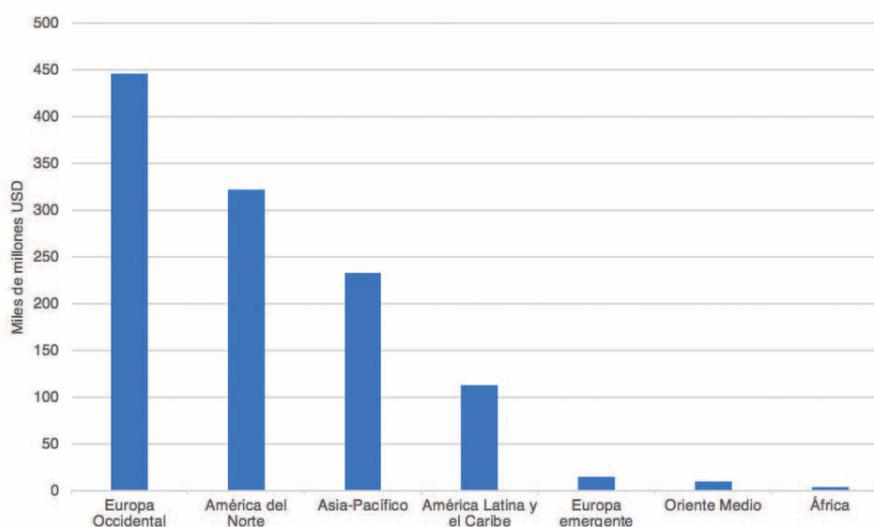
En primer lugar, a medida que las industrias cambien, las oportunidades de empleo en sectores tradicionalmente “marrones” disminuirán. Se calcula que se podrían crear 15 millones de nuevos empleos

netos en la región con la descarbonización para 2030 (Delgado, Eguino y Pereira, 2021). En particular, se estima que a pesar de que se crearían empleos en la región en los sectores de agricultura basada en la producción de plantas, construcción, manufactura y energía renovable, también se cree que la transición costará 7,5 millones de empleos en agricultura animal, extracción de combustibles fósiles y minería, y energías basadas en combustibles fósiles (Saget, Vogt-Schlib y Luu, 2020).

Para reaccionar ante este impacto, será sumamente necesario que estas inversiones vengán acompañadas de medidas de “*reskilling*” en estos sectores “marrones” y de transferencia de capacidades y de tecnología hacia los sectores nuevos. A medida que los sectores “marrones” se adapten a las nuevas normas ecológicas, las competencias anteriores podrían perder relevancia y los trabajadores necesitarían una nueva formación para no quedarse atrás. Al mismo tiempo, las empresas podrían experimentar una reducción de beneficios y cuotas de mercado a medida que pasan a adoptar las nuevas mejores prácticas. Para garantizar que las nuevas oportunidades de mercado se aprovechen al máximo, será fundamental fomentar inversiones que generen empleo en sectores estratégicos, y dar prioridad a la transferencia de competencias y tecnología para complementar estos cambios.

La inversión de la UE en ALC indica un mayor interés del mercado por las industrias emergentes de la región, pero será necesario aumentar la inversión para cubrir todos los sectores emergentes y prometedores. Durante la última década, la UE destaca por su nivel de inversión en ALC; es el principal inversor, con el 36% del total de inversión extranjera directa (IED) en la región (Figura 5), sobre todo en los sectores de energía renovable y telecomunicaciones. Sin embargo, la inversión total en ALC ha flaqueado y se encuentra en su punto más bajo desde 2007, como consecuencia tanto de la priorización de invertir entre países desarrollados como la contracción de inversión tras los choques al mercado durante la pandemia (CEPAL, 2022).

**FIGURA 5. Origen de la Inversión Extranjera Directa hacia América Latina y el Caribe (2010-2022)**



Fuente: Elaboración propia con datos de fDi Markets, 2023.

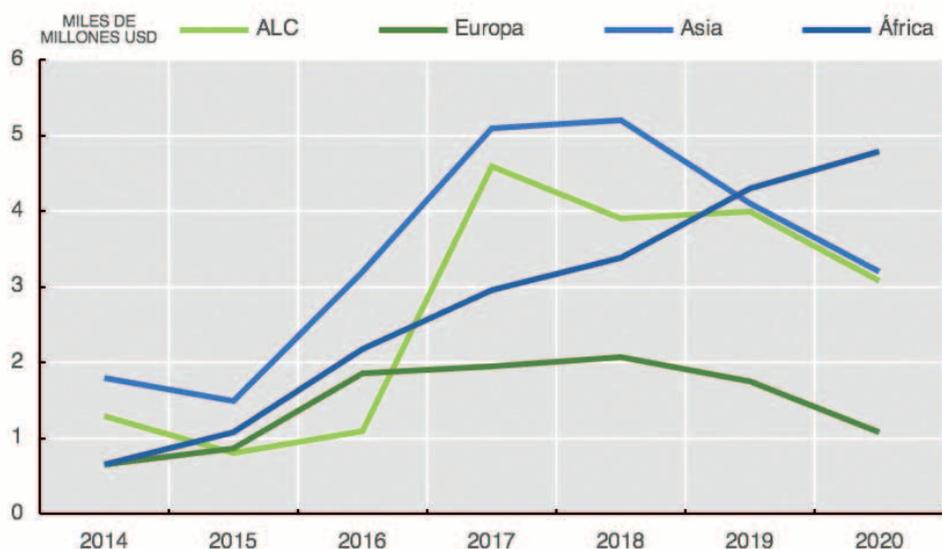
A futuro, será fundamental considerar cómo dirigir más inversión hacia sectores estratégicos y recuperar las tasas de inversión. Las nuevas normas sobre cooperación con países de distintos niveles de renta garantizan que la cooperación con ALC puede ser un foco estratégico en la transición verde de la UE y en el apoyo internacional a los objetivos medioambientales (Comisión Europea, 2021).

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para movilizar financiación privada es cada vez más usada por los países socios en el objetivo de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En numerosos casos se han puesto en marcha diversos instrumentos de reducción o eliminación de riesgos (*de-risking*) para atraer inversiones privadas a proyectos de desarrollo. Usualmente, está destinado a atraer capital hacia economías con bajos rendimientos, mal funcionamiento de los mercados locales y climas de inversión desafiantes. Esta combinación de inversiones, con instrumentos de reducción o eliminación de riesgo u otros, denominada *blended finance*, hace referencia al uso estratégico de la financiación del desarrollo para la movilización de financiación adicional hacia el desarrollo sostenible en los países en desarrollo (OCDE, 2018). La financiación combinada puede agregar valor al atraer fondos que no estaban dirigidos al desarrollo sostenible en países y sectores que tienen necesidades de inversión significativas para cumplir con los ODS.

Estas medidas han tenido éxito en la obtención de financiación privada y en la mejora de los resultados de desarrollo, pero existe preocupación con este enfoque. Los accionistas privados pueden recibir fondos a expensas de los sectores y regiones donde más se necesitan. Los fondos siguen siendo insuficientes para cubrir el déficit de financiación de los ODS. La combinación puede crear riesgos a más largo plazo para las agencias de desarrollo y costos para los gobiernos receptores. Las evaluaciones tradicionales a menudo no capturan el impacto completo de dichas políticas. Además, el uso de la AOD de esta manera tiene un costo de oportunidad y la combinación puede promover la perspectiva de los inversores financieros sobre los resultados del desarrollo (Unión Europea, 2020).

En América Latina y el Caribe la financiación mixta podría ser un instrumento innovador para movilizar recursos privados para financiar la transición verde, dado que no se dispone de suficientes mecanismos de regulación y que las percepciones erróneas del riesgo obstaculizan el acceso a la financiación, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, a diferencia de otras regiones, la financiación mixta ha ido disminuyendo en ALC, desde 2017 (Figura 6).

**FIGURA 6. Importes movilizados por el sector privado mediante intervenciones oficiales de financiación del desarrollo, 2014-2020**



Fuente: OECD *et al.*, 2022.

La Unión Europea no ha sido la excepción. Importantes estrategias de la UE han impulsado el uso de financiación combinada y se espera que esta se amplíe con la estrategia del Global Gateway (Bilal y Medinilla, 2022). Esta estrategia tiene como objetivo favorecer inversiones en países socios de la UE a través de instrumentos como la eliminación de riesgos. Es importante examinar estas estrategias, y acompañarlas de esquemas de diálogos de políticas públicas para garantizar que las inversiones en ALC favorezcan las reformas necesarias para el desarrollo de la industria de la región, generen empleos locales de calidad, y se conserven las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo locales para garantizar el éxito.

### **La importancia de asegurar contenido local**

Asegurar un importante contenido local en las inversiones será clave. Un sector prometedor para inversión europea es el de la energía renovable y las tecnologías asociadas para su desarrollo. ALC cuenta con un gran potencial en energías renovables —como ya se ha mencionado—, sin embargo, se requiere mayor financiación para expandir los sectores de innovación e investigación, y así impulsar la transformación productiva al tiempo que se generan empleos de calidad. Este sector es una fuente de oportunidades para la cooperación tanto con el sector público como en el privado europeos.

La atracción de la inversión puede incluir el uso de empresas locales para fortalecer el desarrollo de cadenas de suministro locales y catalizar la productividad laboral de industrias verdes. Un ejemplo de la promoción de contenido local es el éxito de la expansión del sector de energía solar y eólica en Uruguay y Brasil. En 2009, Uruguay abrió una convocatoria de subasta para ampliar pequeños parques eólicos, exigiendo un 20% de contenido local, un 80% de contratación local y que el centro de control tuviera su sede en Uruguay (Saget, Vogt-Schlib y Luu, 2020). Esta iniciativa fue destacada no solo por ofrecer empleo de calidad para ampliar el sector de las energías renovables, sino también por aprovechar los requisitos de contenido local en beneficio de la fabricación local. Del mismo modo, en 2002, Brasil puso en marcha el Programa de Incentivación de Fuentes Alternativas de Electricidad con un requisito de contenido local del 60% (Saget, Vogt-Schlib y Luu, 2020). Este requisito ha catalizado la cadena de suministro nacional y ha dado lugar a más de 300 empresas desde la puesta en marcha del programa y, en 2014, el sector de fabricación de energía eólica de Brasil utilizaba un 89% de contenido nacional (IRENA, 2019).

Sin embargo, el éxito de los requisitos de contenido local depende de equilibrar el aumento de los costos de producción locales con instrumentos de política pública adecuados. Aunque los gobiernos de ALC han desplegado diversas herramientas para incentivar la inversión extranjera, por ejemplo, en energías renovables, en los últimos quince años las subastas se han consolidado como la estrategia más eficaz y ampliamente utilizada (Bersalli, Menanteau y El-Methni, 2020). Es importante destacar que las subastas estimulan la competencia para bajar los precios, al tiempo que benefician a las empresas que reciben la promesa de unos ingresos estables durante la vigencia del contrato (Hansen *et al.*, 2020). Al incluir cláusulas para priorizar el empleo local, la transparencia y una mayor industrialización, los contratos se adjudican en función de su beneficio relativo tanto para los gobiernos locales como para la empresa inversora.

A pesar de estos ejemplos, los requisitos de contenido local no ofrecen resultados garantizados en todas partes, y la evidencia sobre la mejor forma de aplicarlas es mixta. Por ejemplo, el relativo éxito de Brasil se debe en parte al aumento de la demanda en el mercado nacional y a la capacidad de fabricación existente cuando se implantaron las normas. Mientras que la industria de fabricación de turbinas eólicas era prácticamente inexistente antes de la aplicación del sistema de subastas, el sector siderúrgico del país, bastante desarrollado, se prestó a la diversificación para incluirlas, al tiempo que

un interés constante en la industria naciente proporcionó un flujo importante de nuevos proyectos y una creciente demanda interna (Hansen *et al.*, 2020).

Esto respaldaría la hipótesis según la cual los requisitos de contenido local se aplican mejor en países donde existe un nivel instalado de capacidades y capital humano desarrollado y, por lo tanto, cuenta con el potencial de adoptar nuevas tecnologías para mejorar la productividad a nivel local, aumentando así la eficiencia y apoyando al mismo tiempo el crecimiento nacional. Asimismo, ilustra la necesidad para invertir más en programas de capacitación para expandir las capacidades de industrias ya existentes.

Por consiguiente, la cooperación de la UE puede liderar la inversión en el potencial de las industrias verdes nacientes, por ejemplo, a través de reforzar aún más el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en ALC. Siete países latinoamericanos ya han publicado planes nacionales para el desarrollo de un mercado de hidrógeno verde, entre ellos Brasil y Chile (González Martínez y Cubillos, 2022). Otros países, como México y Argentina, han confirmado planes para desarrollar estrategias nacionales o piloto para lo que se considera un mercado crítico para la transición energética. En total, hay 84 proyectos en desarrollo u operativos en la región (Dannemann, 2023). La inversión en hidrógeno y otros combustibles bajos en carbono, incluidos los biocombustibles sostenibles, será necesaria para apoyar la descarbonización en las industrias pesadas y el transporte, como la química, la siderurgia, el transporte de mercancías por carretera, la aviación y el transporte marítimo.

El interés casi universal por esta frontera científica y económica muestra que existe la necesidad de una estrategia regional que garantice una colaboración eficaz tanto dentro de América Latina como con los mercados exteriores. Para ello, la UE puede apoyar a los países de ALC en el desarrollo de una agenda regional, además de incorporar el hidrógeno a la legislación y la reglamentación e impulsar el compromiso del sector privado. La cooperación en la creación conjunta de tecnología puede ayudar a reducir los costos de producción del hidrógeno verde. Al colaborar en la creación de infraestructura y estándares comunes, y compartir los avances tecnológicos y la experiencia en la fabricación, los países de la UE pueden lograr economías de escala y hacer que el hidrógeno verde sea más competitivo en comparación con otras formas de energía. Además, si se impulsan el intercambio y la comercialización del hidrógeno verde entre los países de la región se facilita el desarrollo de mercados regionales.

### **El rol de las agencias de promoción de la inversión**

Además, a nivel institucional, la UE puede apoyar la mejora de las agencias de promoción de la inversión (API) de los países de ALC para facilitar una IED eficaz y de calidad (Moran *et al.*, 2017). En concreto, los socios de la UE pueden apoyar la financiación de las API de ALC, ampliar su atención a la investigación y la innovación, y respaldar planes sólidos de evaluación y rendición de cuentas. En primer lugar, las API de ALC suelen carecer de fondos: mientras que, en promedio, la API de un país de ALC tiene un presupuesto de 5 millones de dólares estadounidenses, el presupuesto medio de los países de la OCDE es de casi 14 millones de dólares estadounidenses (Volpe Martincus y Monika, 2019). La financiación para ampliar las operaciones y la capacidad de los API sería una inversión inteligente para apoyar el crecimiento a largo plazo.

Por consiguiente, estas inversiones serían especialmente beneficiosas si se dirigieran a la innovación. Mientras que el 23% de los países de la OCDE tienen API que priorizan específicamente la promoción de la innovación y las inversiones internas otorgando incentivos financieros, solo el 11% de los países de ALC lo hacen (Volpe Martincus y Monika, 2019). Además, al dar prioridad a la innovación en sectores verdes, los API pueden facilitar la generación de empleo a largo plazo en campos florecientes. Para liberar el potencial de ALC en investigación científica y desarrollo, es esencial que los inversores tengan acceso a fondos que promuevan la innovación y el aprendizaje.

Por último, la cooperación de la UE puede apoyar planes claros de evaluación y ejecución para garantizar que las IPA maximicen su eficacia y su potencial. Las API deben alinear claramente los indicadores de resultados con sus mandatos oficiales, garantizando que el personal tenga la formación necesaria para analizar y ajustar en función de los puntos fuertes en materia de exportaciones, desarrollo del sector ecológico y otras cuestiones críticas. Además, será esencial diseñar mecanismos que garanticen la corrección cuando no se cumplan los objetivos de los indicadores. Al exigir responsabilidades legales a los inversores que incumplan la legislación nacional o no cumplan sus promesas, las API pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de la innovación y el desarrollo necesarios para ampliar los sectores verdes.

#### **4.2. Capacidades a nivel nacional y diálogo de políticas**

Los países latinoamericanos enfrentan limitaciones en recursos domésticos debido a bajos niveles de recaudación, lo que dificulta su capacidad para invertir en investigación, infraestructura verde y programas sociales, entre otros. La falta de ingresos fiscales suficientes y una estructura tributaria desequilibrada son obstáculos para financiar una transición verde. Es necesario reformar los sistemas tributarios para aprovechar los impuestos medioambientales, como los que gravan la contaminación y las emisiones, y ampliar su uso. Es importante invertir los ingresos generados en programas de formación para el empleo y protecciones sociales para la transición verde. La eliminación de subsidios a combustibles fósiles permitiría un mayor retorno de la inversión en energías verdes. Todo esto es fundamental establecerlo a través de un intercambio de experiencias entre países latinoamericanos y socios con el fin de fortalecer las capacidades nacionales y promover una transición verde justa.

En ALC los países cuentan con pocos recursos domésticos dados sus bajos niveles de recaudación, limitando su capacidad para invertir en investigación pública, infraestructura verde, y los programas sociales y de capacitación necesarios para asegurar una transición justa. En concreto, la falta de ingresos fiscales suficientes y una estructura tributaria desequilibrada constituyen un punto débil clave en el potencial de ALC para financiar una transición verde.

Por ejemplo, los impuestos de países latinoamericanos difieren considerablemente de los países de la OCDE. Mientras que la media de la OCDE en relación con el PIB se sitúa en torno al 34%, la de América Latina es de solo el 22% y ha disminuido como consecuencia de la pandemia. Además, la estructura tributaria de ALC muestra tener bajos ingresos por impuestos sobre la renta personal y contribuciones a la Seguridad Social, en comparación con el promedio de la OCDE (9,2% de los ingresos fiscales totales en ALC frente al 23,5% en los países de la OCDE en promedio en 2019). De manera similar, los países de ALC dependen más de los impuestos sobre bienes y servicios, derivando casi el 50% de los ingresos fiscales en promedio, en comparación con alrededor del 30% en promedio en las economías de la OCDE. En cambio, el impuesto a las ganancias corporativas es relativamente alto; representa el 15,6% de los ingresos fiscales totales en ALC, en comparación con solo el 9,6% en la OCDE (OCDE *et al.*, 2022).

Los sistemas tributarios deben estar más alineados con las necesidades de financiación de las nuevas políticas de la transición verde. Más allá del impacto directo de disponer de mayores recursos financieros para proyectos domésticos, los gobiernos de ALC también se beneficiarían de una mayor autonomía derivada de un sistema fiscal coherente y autosuficiente. Actualmente, la estructura tributaria depende altamente de impuestos indirectos, así como de una carga importante en impuestos a las empresas y, como resultado, requiere especial atención para no solamente atraer mayor inversión extranjera directa (IED) sino maximizar el impacto de aquellas inversiones en curso para a su vez potenciar la capacidad de generación de trabajo de calidad, formal y decente.

Para aumentar los impuestos medioambientales, gobiernos de la región podrían mirar hacia los impuestos sobre el carbono. Este tipo de impuestos se han venido implementando lentamente en ALC y pueden desencadenar una serie de cambios beneficiosos para los objetivos de reducción de emisiones. Por ejemplo, algunos países de la región ya han establecido los primeros impuestos sobre el carbono, como Colombia, que incluyó un impuesto sobre el carbono en reformas fiscales más amplias en 2016 e invirtió los ingresos en el fondo Colombia Sostenible (ANDI, 2017). México introdujo un impuesto sobre la venta e importación de combustibles fósiles en 2014 y Chile lo implementó en 2017 (CEPAL, 2017). Al invertir los fondos generados por estos impuestos en proyectos vinculando el bienestar de la naturaleza con necesidades socioeconómicas, los impuestos aseguran que los ciudadanos no se quedarán atrás por los costos de la transición verde.

Del mismo modo, si se aplican sin precisión o sin mecanismos de apoyo adicionales, el aumento de los impuestos medioambientales corre el riesgo de afectar en mayor medida a los hogares más pobres. Los impuestos sobre el carbono pueden afectar desproporcionadamente a la población vulnerable si no se hace un balance con programas sociales adicionales para evitar que un impuesto al carbono sea regresivo (Vogt-Schlib *et al.*, 2019; OCDE *et al.*, 2022).

Abordar estos retos distintos requiere un doble enfoque: en primer lugar, ampliar la escala tanto dentro de los pocos países que ya cuentan con políticas como expandir el uso de esas políticas a los países que carecen de ellas. En segundo lugar, invertir una parte de los ingresos generados por estos impuestos en programas de capacitación profesional y ampliar las protecciones sociales específicas para proteger a las familias de las posibles tensiones financieras de la transición.

Además, la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles también sería fundamental y permitiría un mayor retorno de la inversión en el sector de las energías verdes. Actualmente, la inversión en energía verde en América Latina es mayor que la inversión en combustibles fósiles; de 2010 a 2022, la IED en el sector de carbón, petróleo y gasolina era de 113 millones de dólares estadounidenses, comparado con los 145 millones invertidos en el sector de energías renovables (fDi Markets, 2023). Estimaciones han mostrado que una eliminación gradual de los subsidios a la energía y la introducción de impuestos al carbono de hasta 75 dólares estadounidenses por tonelada podría ayudar a algunos países de ALC a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2016. Los ingresos generados por estas políticas oscilan entre el 0,5 y el 4,5 por ciento del PIB, y podrían usarse para compensar a los hogares vulnerables por los precios más altos del carbono (Ivanova *et al.*, 2021).

La adecuación de la política fiscal hacia una política más progresiva e incentivadora de la transición verde justa, así como el fomento de impuestos medioambientales, se beneficiaría de un intercambio mayor de experiencias entre no solo los países de ALC, a nivel regional, sino también con otros países y con la UE. El fortalecimiento de espacios de diálogo de políticas públicas a nivel regional en ALC y que se crucen con las experiencias de países de la UE sería útil para avanzar.

#### **4.3. Coherencia de políticas y alineación de estándares**

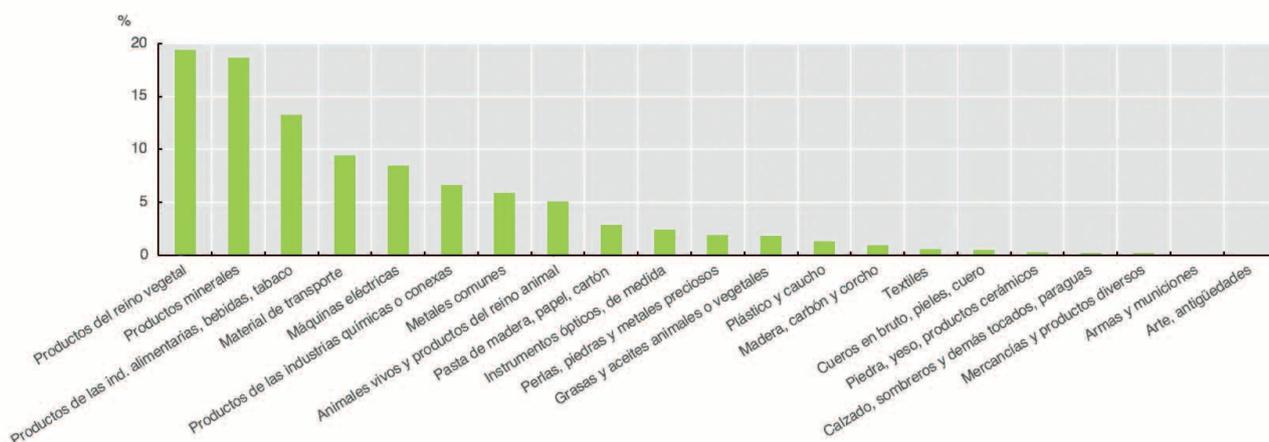
Además de impulsar las capacidades a nivel nacional —mayor recaudo y más progresivo—, es necesario garantizar el acceso continuado a mercados internacionales. Dado que la UE es uno de los socios de comercio más grandes de ALC, será imprescindible alinear los estándares de producción en ALC con los de importación en la UE.

Con la entrada en vigor del Pacto Verde, la UE tendrá regulaciones estrictas sobre las importaciones de productos agrícolas y agroindustriales. Este pacto incluye nuevos estándares de sustentabilidad

que están vinculados a agroquímicos, etiquetado, certificaciones, sellos, empaques y trazabilidad. Los países socios deberán cumplir con estos nuevos estándares ambientales, laborales y sociales. Con la adopción del Pacto Verde Europeo, la política climática ahora está firmemente integrada en la nueva estrategia de crecimiento de la UE. Esta ambiciosa agenda tiene como objetivo desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos. La Unión Europea y sus Estados miembros han aprovechado su liderazgo climático y el poder del mercado único europeo para involucrar a otros países en el aumento de la ambición de sus políticas climáticas.

Esta agenda se ha entendido también como un objetivo geopolítico y de política exterior. Al fijarse un objetivo de coherencia de todas las políticas aplicadas, Europa adopta un enfoque que supera los casilleros tradicionales de la política climática (Tubiana, 2021; Sanahuja, 2022; Wolf, Teitge, Mielke, Schutze y Jaeger, 2021). El Green Deal se convierte así en el estándar de medición y referencia, así como en una herramienta de política internacional. Sin embargo, esta agenda tiene implicaciones para los países latinoamericanos. Los posibles efectos en ALC surgen de la balanza comercial entre ALC y la UE (Figura 7). ALC sigue siendo un proveedor clave de productos agroindustriales y materias primas para la UE. En 2021, la UE27 fue el destino del 8,9% (89.900 millones de euros) del total de las exportaciones de ALC (OCDE *et al.*, 2022).

**FIGURA 7. Proporción de las exportaciones de ALC a la UE27 en 2021**



Fuente: OCDE *et al.*, 2022.

La UE puede explorar diferentes opciones para fortalecer capacidades domésticas a través de una industria clave para la transición verde: la agricultura. Dado el perfil único de emisiones de ALC y su creciente papel como exportador de alimentos, la agricultura es un área clave para las intervenciones verdes. La región se ha convertido en el mayor exportador neto de alimentos del mundo y se prevé que sus exportaciones de alimentos aumenten un 19% entre 2020 y 2030 (JP Morgan, 2022).

Además, si bien los cálculos simples del PIB indican que la agricultura representa el 5% del PIB en veinte países, cuando se tienen en cuenta los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante y los efectos indirectos, su impacto es significativamente mayor: por ejemplo, la agricultura primaria representó el 2,9% del PIB de México, pero cuando se tuvieron en cuenta los eslabonamientos, representó el 11,9% (Morris, Rekha Sebastian y Eugenia Perego, 2020).

Sin embargo, el éxito ha tenido un elevado coste ecológico: la agricultura y el uso de la tierra producen el 45% de los gases de efecto invernadero de la región, frente a la media mundial del 14%. Estas actividades intensivas también utilizan más de un tercio de la superficie terrestre de la región y consumen casi tres cuartas partes de los recursos de agua dulce. Además, para seguir el ritmo de la demanda mundial, la producción agrícola tendrá que crecer un 80% de aquí a 2050, lo que exige que ALC adapte sus técnicas agrícolas a estrategias más productivas y sostenibles (JP Morgan, 2022).

Para hacer frente a los peligros medioambientales de una contaminación tan intensa y mantener su competitividad internacional, los productores de alimentos de ALC deben adaptarse a las nuevas normas ecológicas de sus consumidores, principalmente, la UE. Para empezar, la UE ya ha reconocido la importancia de colaborar con los países productores en los sistemas alimenticios y su estrategia “de la granja a la mesa” incluye la necesidad de construir alianzas verdes con los países que tendrán que adaptarse a las nuevas normas sobre el uso de pesticidas y antibióticos, promoción de proteína vegetal y otros elementos de cadenas sostenibles (Larrea, 2021). Para alcanzar esta meta, la UE podría expandir su capacidad para evaluación y transferencia de tecnología para facilitar la adaptación y transición del cultivo.

Existe una necesidad de fortalecer capacidades en sectores con potencial ecológico y aquellos más afectados por el Pacto Verde Europeo: los alimentos, materiales de construcción, fertilizantes y productos minero-energéticos. Para facilitar esa transición, la Unión Europea podría facilitar futuros esfuerzos de los países ALC destinados a establecer hojas de ruta para la adaptación a las nuevas normas y reglamentaciones. Aunque los países latinoamericanos tendrán que colaborar para garantizar la coherencia normativa y la gestión adecuada de los recursos transnacionales, cada país sigue enfrentándose a sus propios retos y abordará las nuevas normas medioambientales basándose en los ordenamientos jurídicos nacionales. Una verdadera coherencia política requiere entonces una cooperación de la UE basada en apoyo para la transferencia de tecnologías y capacitación técnica, entre otras. El apoyo de la UE podría centrarse en la creación de hojas de ruta individualizadas, adaptadas a las ventajas relativas y a las capacidades productivas de cada país; esto será esencial para asegurar una homogeneización dentro del mismo continente.

Además de proteger, y quizás ampliar, la participación en el mercado de ALC en los mercados europeos, la adaptación a estos estándares también impulsaría el comercio regional y el fortalecimiento de economías latinoamericanas. Como parte de ese proceso, la UE puede fortalecer los diálogos sobre la adaptación en los sectores más urgentes y ofrecer periodos de transición. En el caso de las exportaciones agrícolas e industriales, esto permitiría a los productores invertir lentamente dinero en cambiar equipos e instalaciones para cumplir las nuevas normas, sin devastar su potencial exportador de la noche a la mañana.

Para respaldar la integración de nuevas normas en industrias ya existentes, la UE puede también aumentar las inversiones en el desarrollo de programas de transformación productiva a medida para adaptar la oferta exportable a los nuevos requisitos. Dado que este proceso implicará inversiones del sector privado, promoviendo industrias de productos sostenibles e iniciativas para reforzar las instituciones que favorecen los mecanismos de coordinación público-privada, también deberían ser un objetivo del apoyo de la UE.

#### **4.4. Apoyo multilateral**

Por último, será necesario fortalecer el sistema multilateral para lograr una transición verdaderamente justa y equitativa. Existen numerosas herramientas a nivel multilateral que podrían servir para fomen-

tar la transición en ALC. Entre ellas, el financiamiento climático, la transferencia de tecnología, el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica en particular en el fortalecimiento de las iniciativas a nivel (macro) regional son los más relevantes a la alianza eurolatinoamericana.

A nivel multilateral, la financiación verde puede adoptar diferentes formas favorecedoras de una transición verde justa en ALC, por ejemplo, los canjes de deuda por acción climática, la redistribución de Derechos Especiales de Giro (DEG), y la financiación inclusiva de “daños y perjuicios”. Socios multilaterales podrían respaldar a los líderes latinoamericanos y sus propuestas para expandir los canjes de deuda a nivel multilateral para facilitar el desarrollo económico sin el desarrollo de los espacios naturales. ALC tiene la mayor proporción de deuda externa en relación con sus exportaciones, lo cual genera un desequilibrio económico que impide la inversión para fortalecer la resiliencia y exacerba su vulnerabilidad climática.

Países como Colombia y Argentina han liderado la promoción de este canje de deuda por acción climática. Se ha sugerido que cancelar esas deudas externas liberarían recursos fiscales importantes para cubrir gastos en proyectos de crecimiento internos y conservación, protegiendo así la biodiversidad y asegurando los derechos humanos de comunidades indígenas y rurales que dependen de esas áreas. El apoyo de alianzas multilaterales será imprescindible para aprobar tal propuesta. Recientemente, Ecuador selló un canje récord de deuda por naturaleza al vender un nuevo “bono azul”, el bono de Galápagos, que canalizará al menos 12 millones de dólares al año para la conservación de las islas Galápagos, uno de los ecosistemas más preciados del mundo (Ministerio de Ambiente, 2023). Sin embargo, los canjes deberán ser parte de un programa más amplio para reestructurar las herramientas fiscales disponibles para países latinoamericanos y para centrar sus voces en las agendas multilaterales (Georgieva, Chamon y Thakoor, 2022). Como parte de ese proyecto, será necesario redistribuir los derechos especiales de giro (DEG) de una manera más equitativa y ofrecer flexibilidad fiscal a los países más vulnerables a posibles desastres del cambio climático.

La iniciativa de Bridgetown ofrece una hoja de ruta innovadora para responder a esos retos, incluso la difícil tarea de galvanizar suficiente capital para invertir en los países que ya sufren los riesgos y daños del cambio climático. Al canalizar un nuevo desembolso de DEG hacia el Fondo Mundial para la Mitigación del Cambio Climático propuesto, los países de renta media y baja tendrán acceso a los préstamos asequibles que necesitan para invertir en medidas de mitigación y adaptación sin coste directo para los países desarrollados (Persuad, 2022). Utilizando los DEG como garantía, el Fondo podría conceder préstamos en varias divisas directamente a los proyectos, lo que permitiría atraer capital privado sin poner en peligro los presupuestos de los gobiernos nacionales. Además, los proyectos estarían en consonancia con los planes nacionales de desarrollo y acción por el clima, además de utilizar tecnología y normas de gobernanza aprobadas para complementar las estrategias industriales ecológicas existentes.

Por otro lado, el apoyo multilateral requiere basarse en diversas herramientas de gobernanza (Tabla 1). Por ejemplo, los acuerdos internacionales y regionales establecen objetivos claros, y compromisos para la reducción de emisiones y la implementación de soluciones sostenibles, y buscan garantizar la cooperación internacional y regional en la lucha contra el cambio climático.

**TABLA 1. Ejemplos de herramientas de gobernanza multilateral en América Latina y el Caribe**

Tipo de herramienta	Descripción
Acuerdos internacionales y regionales	Acuerdo de Escazú Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Fondos multilaterales	Fondo Verde para el Clima Plataforma Regional de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe
Plataformas de diálogo	Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe Plataforma de Cambio Climático de Ministerios de Finanzas La Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe
Fortalecimiento institucional	EUROCLIMA
Mecanismos de seguimiento y evaluación	Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
Cooperación técnica	EUROCLIMA

Fuente: Elaboración propia.

Es clave la coordinación entre los niveles multilateral, regional y nacional. En particular, habrá que dar prioridad a la coherencia entre instituciones nacionales e internacionales. Alinear los planes de desarrollo nacional con objetivos internacionales puede abrir nuevas fuentes de financiación, tanto con gobiernos como con instituciones multilaterales, además de asegurar el potencial de las empresas latinoamericanas para participar en mercados internacionales.

Por otra parte, el fortalecimiento de las iniciativas regionales es clave. Para liberar el potencial político y económico de ALC, las instituciones multilaterales deben priorizar los objetivos regionales respecto a la integración de mercados clave. Una de estas iniciativas es la propuesta de un mercado regional del carbono. ALC es actualmente el segundo mayor proveedor de créditos de fijación voluntaria de precios, con casi el 20% de la oferta mundial de créditos, pero será clave ampliar e integrar los incipientes mercados de carbono de la región para aprovechar totalmente el interés global y la capacidad regional para convertirse en un mercado estable e internacional sobre el carbono.

Para cumplir esa meta, la CAF está impulsando la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo del Mercado de Carbono como herramienta tanto económica como ecológica. Una fijación eficiente del precio de los combustibles de aquí a 2025 reduciría las emisiones mundiales de CO<sub>2</sub> hasta un 36% por debajo de los niveles de referencia, además de generar cuantiosos ingresos en la región: en el caso de ALC, estos podrían alcanzar aproximadamente el 2% del PIB (OCDE *et al.*, 2022). Como resultado, dicho mercado regional presentará nuevas oportunidades para la participación del apoyo internacional. Ahora bien, se requiere de infraestructura, como una plataforma de servicios completa que permita el correcto y adecuado funcionamiento del mercado regional. Además, la región carece de la capacitación técnica necesaria para llevar a cabo este proyecto de mercado. Por eso, será necesario que el apoyo multilateral contribuya al desarrollo de profesionales a través de, por ejemplo, programas de formación, intercambios de investigación y la transferencia de conocimiento que aportan los proyectos multinacionales.

## 5. Conclusiones

El actual contexto de importantes retos económicos globales plantea numerosos debates en torno a la necesidad de establecer políticas para impulsar la transición verde y justa en América Latina y el Caribe. Sin embargo, transitar este camino requerirá de enfoques integrales, con múltiples herramientas y el compromiso de todos los actores, incluidos los países socios. En este sentido, fortalecer la alianza ALC-UE puede ser fundamental para establecer mecanismos que tracen una ruta exitosa desde el inicio.

La oportunidad que tienen ambas regiones para establecer una alianza mutuamente beneficiosa no debería ser desaprovechada. En cuanto a América Latina y el Caribe, la transición verde justa puede representar una nueva oportunidad para potenciar nuevos modelos de desarrollo que ayuden a los países de la región a salir de las trampas de desarrollo, y genere un nuevo contrato social en la región. Para ello es fundamental comenzar por entender qué representa la transición verde para la región para poder responder de forma más adecuada en la alianza UE-ALC.

Son muchas las implicaciones de una transición verde justa en la región. Una nueva alianza UE-ALC implicará un enfoque integrado, haciendo uso de todas las herramientas a mano y la multiplicidad de actores involucrados. Este artículo identifica cuatro claves para lograr una transición verde justa: Primero, inversiones combinadas con un diálogo de políticas públicas que favorezcan la transformación de industrias y sectores verdes estratégicos en la región. Se requiere invertir en sectores con potencial para generar empleos verdes, como la agricultura sostenible, el transporte, la bioeconomía, el turismo y las energías renovables. Además, es importante acompañar esas inversiones con medidas de “*reskilling*”, y transferencia de capacidades y tecnología hacia estos sectores emergentes.

Segundo, se deben alinear los sistemas tributarios con las necesidades de financiación de las políticas de transición verde. Esto implica ampliar la escala de políticas existentes y extender su implementación a países que carecen de ellas. También es necesario invertir una parte de los ingresos generados por estos impuestos en programas de capacitación profesional y protecciones sociales para las familias afectadas por la transición.

Tercero, se deben establecer hojas de ruta adaptadas a las capacidades y ventajas relativas de cada país para cumplir con las regulaciones y estándares del Pacto Verde de la Unión Europea. La cooperación de la UE en transferencia de tecnología y capacitación técnica será fundamental, y la adaptación a estos estándares impulsará el comercio regional y fortalecerá las economías latinoamericanas.

Y finalmente, fortalecer el apoyo multilateral: es importante coordinar los esfuerzos a nivel multilateral, regional y nacional, y explorar diferentes formas de financiamiento verde, como los canjes de deuda por acción climática y la redistribución de Derechos Especiales de Giro. La alineación de los planes de desarrollo nacional con los objetivos internacionales puede abrir nuevas fuentes de financiación y promover la participación de las empresas latinoamericanas en los mercados internacionales.

Un enfoque comprensivo que abarque los diferentes mecanismos ayudaría a fortalecer una alianza entre ambas regiones que impulse una transición verde justa en la región, impulsando la creación de empleos sostenibles, fortaleciendo capacidades y protegiendo el medio ambiente, al tiempo que se fomenta el desarrollo económico y social.

## Referencias bibliográficas

- ACOSTA-ORMAECHEA, S.; PIENKNAGURA, S., y PIZZINELLI, C. (2022): *Tax Policy for Inclusive Growth in Latin America and the Caribbean*, Washington D.C., International Monetary Fund.
- ANDI (2017): *ABC del impuesto al carbono*. Disponible en: <https://www.andi.com.co/Uploads/ABC%20del%20impuesto%20al%20carbono.pdf>.
- BELLO (2022): *Latin America's energy subsidies are good politics but bad policy* (28/07/2022). Disponible en: <https://www.economist.com/the-americas/2022/07/28/latin-energy-subsidies-are-good-politics-but-bad-policy>.
- BERSALLI, G.; MENANTEAU, P., y EL-METHNI, J. (2020): “Renewable energy policy effectiveness: A panel data analysis across Europe and Latin America”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 133, n.p. Doi:<https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110351>.
- BILAL, S., y MEDINILLA, A. (2022): *The Global Gateway: A recipe for EU geopolitical relevance?* Doi:DOI:10.13140/RG.2.2.19635.91688.
- BOWEN, A., y FANKHAUSER, S. (2011): *The Green Growth Narrative: Paradigm Shift or Just Spin?* Global Environmental Cha. Doi:DOI:10.1016/j.gloenvcha.2011.07.007.
- BROWNING, N.; BOUSSO, R., y ROELF, W. (2022): “Analysis: Ukraine war rekindles Europe's demand for African oil and gas” (22/07/2022). Disponible en: <https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-war-rekindles-europes-demand-african-oil-gas-2022-07-22/#:~:text=BRUSSELS%2FLONDON%2FCAPE%20TOWN%2C,executives%20and%20African%20officials%20said>.
- CALVO, E. (2019): *Litio, un recurso estratégico para el mundo actual*. Asociación Civil Ciencia Hoy. Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/89689>.
- CEPAL (2017): *Efectos potenciales de un impuesto al carbono sobre el PIB en los países de América Latina*, Santiago. Disponible en: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41867/1/S1700590\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41867/1/S1700590_es.pdf).
- (2021): *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe*, Santiago. Disponible en: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48494/4/S2300151\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48494/4/S2300151_es.pdf).
- (2022): *Pressure on natural resources in Latin America and the Caribbean: a statistical approach* (01/09/2022). Disponible en: <https://www.cepal.org/en/notes/pressure-natural-resources-latin-america-and-caribbean-statistical-approach>.
- (2022): *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean*, Santiago, CEPAL.
- COMISIÓN EUROPEA (2019): *Political Guidelines for the Next European Commission 2019-2024*. Disponible en: [https://commission.europa.eu/system/files/2020-04/political-guidelines-next-commission\\_en\\_o.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2020-04/political-guidelines-next-commission_en_o.pdf).
- (2021): *NDICI-Global Europe Programming. Americas and Caribbean Regional MIP*, Bruselas. Disponible en: [https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-01/mip-2021-c2021-9356-americas-caribbean-annex\\_en.pdf](https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-01/mip-2021-c2021-9356-americas-caribbean-annex_en.pdf).
- DA COSTA, N. (2021): “Desarrollo en Transición en América Latina en tiempos de la COVID-19”, *Documentos de Trabajo*, nº 49, Madrid, Fundación Carolina.
- DANNEMANN, V. (2023): “La apuesta de América Latina por el negocio del hidrógeno verde” (25/01/2023). Disponible en: <https://www.dw.com/es/la-apuesta-de-am%C3%A9rica-latina-por-el-negocio-del-hidr%C3%B3geno-verde/a-64514118>.
- DELGADO, R.; EGUINO, H., y LOPES, A. (2021): *Fiscal Policy and Climate Change: Recent Experiences of Finance Ministries in Latin America and the Caribbean*, Washington D.C., Inter-American Development Bank. Disponible en: <https://publications.iadb.org/en/fiscal-policy-and-climate-change-recent-experiences-finance-ministries-latin-america-and-caribbean>.
- DELGADO, R.; EGUINO, H., y PEREIRA, A. L. (2021): “Política fiscal y cambio climático: experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo. Doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0003376>.

- ESCRIBANO, G., y URBASOS ARBEOLA, I. (2023): *Why Latin America matters to the EU on energy: diversification, transition partners and new value chains*, Real Instituto Elcano. Disponible en: <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/why-latin-america-matters-to-the-eu-on-energy/>.
- FDI MARKETS (2023): *fDi Markets Database*. Disponible en: <https://www.fdimarkets.com/>.
- FERNÁNDEZ, R., y MACÍA, A. (eds.) (2022): *El Derecho en la encrucijada: Los retos y las oportunidades que plantea el cambio climático*, Madrid.
- GALLUP (2023): *World Poll*.
- GALVIN, R., y HEALY, N. (2020): “The Green New Deal in the United States: What it is and how to pay for it”, *Energy Research y Social Science*. Doi:<https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101529>.
- GBADAMOSI, N. (2022): *Africans Decry Europe’s Energy Hypocrisy* (20/07/2022). Disponible en: <https://foreignpolicy.com/2022/07/20/europe-africa-energy-crisis-oil-gas-fossil-fuels-russia-ukraine-war/>.
- GEORGIEVA, K.; CHAMON, M., y THAKOOR, V. (2022): *El canje de deuda por compromisos por el clima y la naturaleza puede contribuir a financiar la resiliencia* (19/12/2022). Disponible en: <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/12/14/swapping-debt-for-climate-or-nature-pledges-can-help-fund-resilience>.
- GERMANWATCH (2021): *Global Climate Risk Index 2021*. Disponible en: [https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021\\_2.pdf](https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf).
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J., y CUBILLOS, F. (2022): *El tren del hidrógeno verde viene imparabile en América Latina y el Caribe* (22/11/2022). Disponible en: <https://idbinvest.org/es/blog/energia/el-tren-del-hidrogeno-verde-viene-imparabile-en-america-latina-y-el-caribe>.
- HAGEN-ZANKER *et al.*, J. (2016): *Understanding the impact of cash transfers: the evidence*, Londres, Overseas Development Institute. Disponible en: <https://cdn.odi.org/media/documents/11465.pdf>.
- HANSEN, U. *et al.* (2020): “The effects of local content requirements in auction schemes for renewable energy in developing countries: A literature review”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 127, n.p. Doi:<https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109843>.
- HERNÁNDEZ, G., y LAATS, H. (2020): Buen vivir: a concept on the rise in Europe?, *Green European Journal*, n.p.
- IEA (2021): *An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China*. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-carbon-neutrality-in-china>.
- (2023): *Latin America’s opportunity in critical minerals for the clean energy transition*, París, International Energy Agency.
- IRENA (2019): *Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2019*, Abu Dhabi, International Renewable Energy Agency.
- IVANOVA, A. *et al.* (2021): “Climate Change Challenges in Latin America and the Caribbean Challenges and Opportunities”, *Regional Economic Outlook: Western Hemisphere*, Washington D.C., International Monetary Fund. Disponible en: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/10/28/blog-climate-change-latin-america-the-caribbean-challenges-and-opportunities>.
- JP MORGAN (2022): *AgTech in Latin America: Small-scale solutions in a large-scale transformation* (12/08/2022). Disponible en: <https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/agtech-in-latin-america-small-scale-solutions-in-a-large-scale-transformation#9>.
- LARREA, N. (2021): *The Implications of the European Green Pact for Latin America* (5/02/2022). Disponible en: <https://www.caf.com/en/knowledge/views/2021/02/the-implications-of-the-european-green-pact-for-latin-america/>.
- MACPHERSON, E., y TORRES VENTURA, J. (2019): *The Tour to Save the World: Colombia wins the Yellow Jersey for the Rights of Nature* (03/09/2019). Disponible en: <https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/201909/tour-save-world-colombia-wins-yellow-jersey-rights-nature>.
- MAGACHO, G.; GODIN, A.; HÉMAR, M., y MANSART, E. (2022): *Low-carbon transition in Latin America: what are the risks and the main constraints?* (07/06/2022). Disponible en: <https://oecd-development-matters.org/2022/06/07/low-carbon-transition-in-latin-america-what-are-the-risks-and-the-main-constraints/>.

- MALMIERCA, A.; QUIROZ, C., y LEONARD, P. (2022): *ECLAC Statistical Briefings: Energy in Latin America and the Caribbean: access, renewability and efficiency*, United Nations ECLAC.
- MINISTERIO DE AMBIENTE (2023): *Ecuador anuncia el canje de deuda por naturaleza más grande del mundo para proteger las islas Galápagos*, Gobierno de Ecuador. Disponible en: <https://www.ambiente.gob.ec/ecuador-anuncia-el-canje-de-deuda-por-naturaleza-mas-grande-del-mundo-para-proteger-las-islas-galapagos/>.
- MONSALVES, M. (2022): “¿Sería útil para América Latina dejar de crecer o solo deben consumir menos los países más ricos?”, *El País* (19/05/2023). Disponible en: <https://elpais.com/america-futura/2022-10-17/seria-util-para-america-latina-dejar-de-crecer-o-solo-deben-consumir-menos-los-paises-mas-ricos.html>.
- MORAN, T. *et al.* (2017): *Attracting quality foreign direct investment in developing countries* (19/10/2017). Disponible en: <https://www.theigc.org/blogs/attracting-quality-foreign-direct-investment-developing-countries>.
- MORRIS, M.; REKHA SEBASTIAN, A., y EUGENIA PEREGO, V. M. (2020): *Future Foodscapes: Re-imagining Agriculture in Latin America and the Caribbean*, Washington DC, World Bank Group. Disponible en: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/942381591906970569/pdf/Future-Foodscapes-Re-imagining-Agriculture-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf>.
- NUSO (2021): *Latin America - European Union: views, agendas and expectations*. Disponible en: <https://data.nuso.org/en/about-the-survey>.
- OCDE (2018): *Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals*, París, OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/9789264288768-en>.
- (en preparación): *Emerging Challenges And Shifting Paradigms 2.0*.
- OCDE *et al.* (2019): *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, París, OECD.
- (2020): *Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better*, París, OECD Publishing.
- (2022): *Perspectivas Económicas de América Latina y el Caribe 2022: Hacia una transición verde y justa*, París, OECD Publishing.
- (2022): *Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022*, París, OECD Publishing. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/58a2dc35-en-es>.
- PERSUAD, A. (2022): *Bridgetown Initiative calls for new Global Climate Mitigation Trust financed via Special Drawing Rights* (08/12/2022). Disponible en: <https://www.brettonwoodsproject.org/2022/12/bridgetown-initiative-calls-for-new-global-climate-mitigation-trust-financed-via-sdrs/>.
- PIZARRO, R. (2021): “Presentation for Carbon Outlook Knowledge Exchange Series #2: Lessons Learned from Carbon Tax Implementation”, *Lessons from Carbon Tax in Chile*, World Bank (07/10/2022). Disponible en: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/813c96e1134d1142cf37af5492fdb45d-0070012021/original/071021-CO2-Tax-in-Chile-Rodrigo-Pizarro.pdf>.
- LA PRENSA LATINA (2021): “Panama, Bhutan, Suriname, world’s only ‘carbon negative’ countries” (04/08/2022). Disponible en: <https://www.laprensalatina.com/panama-bhutan-suriname-worlds-only-carbon-negative-countries/>.
- SAGET, C.; VOGT-SCHLIB, A., y LUU, T. (2020): *Jobs in a Net-Zero Emissions Future in Latin America and the Caribbean*, Washington D.C. y Ginebra, Inter-American Development Bank and International Labor Organization.
- SANAHUJA, J. A. (2021): *Transitions in development: the European Green Deal and Latin America* (22/03/2021). Disponible en: <https://oecd-development-matters.org/2021/03/22/transitions-in-development-the-european-green-deal-and-latin-america/>.
- (2022): “El Pacto Verde, *NextGenerationEU* y la nueva Europa geopolítica”, *Documentos de trabajo*, nº 63, Madrid, Fundación Carolina. Disponible en: [https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/05/DT\\_FC\\_63.pdf](https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/05/DT_FC_63.pdf).
- SCRIVEN, J. (2022): *How Latin America is Leading in the Renewable Energy Space* (02/11/2022). Disponible en: <https://www.idbinvest.org/en/blog/energy/how-latin-america-leading-renewable-energy-space>.

- TERZI, A. (2020): “Crafting an effective narrative on the green transition”, *Energy Policy*. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111883>.
- TUBIANA, L. (2021): *El Green Deal es el nuevo contrato social*. Disponible en: <https://legrandcontinent.eu/es/2021/09/28/laurence-tubiana/>.
- UNIÓN EUROPEA (2020): “The use of development funds for de-risking private investment: how effective is it in delivering development results?”. Disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO\\_STU\(2020\)603486\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603486/EXPO_STU(2020)603486_EN.pdf).
- VOGT-SCHLIB, A. *et al.* (2019): *Cash transfers for pro-poor carbon taxes in Latin America and the Caribbean*, Washington D.C., Inter-American Development Bank.
- VOLPE MARTINCUS, C., y MONIKA, S. (2019): *How to solve the investment promotion puzzle: a mapping of investment promotion agencies in Latin America and the Caribbean and OECD countries*, Washington D.C., IADB. Disponible en: <https://publications.iadb.org/en/how-solve-investment-promotion-puzzle-mapping-investment-promotion-agencies-latin-america-and>.
- WOLF, S.; TEITGE, J.; MIELKE, J.; Schutze, F., y JAEGER, C. (2021): “The European Green Deal – More Than Climate Neutrality”, *Review of European Economic Policy*. Disponible en: <https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/number/2/article/the-european-green-deal-more-than-climate-neutrality.html>.
- YEPEZ, A. (2022): *Cinco cosas que deberías de saber sobre la transición energética verde en América Latina y el Caribe* (14/11/2022). Disponible en: <https://blogs.iadb.org/energia/es/cinco-cosas-que-deberias-de-saber-sobre-la-transicion-energetica-verde-en-america-latina-y-el-caribe/>



Fundación Carolina, junio 2023

Fundación Carolina  
Plaza del Marqués de Salamanca nº 8  
4ª planta, 28006 Madrid - España  
[www.fundacioncarolina.es](http://www.fundacioncarolina.es)  
[@Red\\_Carolina](https://twitter.com/Red_Carolina)

ISSN-e: 1885-9119

DOI: <https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.DT83>

Cómo citar:

Da Costa, R. y Caicedo, A. (2023): “Expandir el potencial de la alianza UE-ALC: enfoques integrados para la transición verde justa en América Latina y el Caribe”, *Documentos de trabajo*, nº 83 (2ª época), Madrid, Fundación Carolina.

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons  
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

